



Señores

JUZGADO TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
E. S. D.

notificaciones.prejudiciales@mindefensa.gov.co
decun.notificaciones@policia.gov.co
notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co
procesosordinarios@mindefensa.gov.co
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co

Asunto: Pronunciamiento de excepciones
Demandantes: Armando Sánchez y otros
Demandadas: La Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Otros

Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.116.238.813 y portador de la tarjeta profesional No. 199.083 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de representante legal y profesional del derecho inscrito en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Legalgroup Especialistas en Derecho S.A.S., quien a su vez funge en calidad de apoderada judicial de los demandantes en el proceso de la referencia, a través del presente escrito procedo a **pronunciarme respecto de las excepciones** propuestas por el Ministerio de defensa-Policía Nacional.

1. Cuestión previa: Oportunidad procesal

El parágrafo 2° del artículo 175 CPACA-, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021 establece con relación a las excepciones que:

“[...] De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas [...]”.

A su vez el artículo 201A del CPACA, adicionado por el artículo 51 de la Ley 2080 del 2021, establece:

“(...) Los traslados deberán hacerse de la misma forma en que se fijan los estados. Sin embargo, cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente. (...)”

De conformidad con lo anterior, es importante destacar que en el presente asunto el **Ministerio de defensa-Policía Nacional**, envió contestación de la demanda al correo electrónico de la persona jurídica apoderada de la parte demandante el 30 de septiembre del 2024, razón por la cual el traslado de las **excepciones** propuestas inicia el 01 de



octubre y fenece el 03 de octubre del 2024, de lo que se concluye que el presente escrito es presentado oportunamente.

2. De las excepciones previas propuestas por el Ministerio de defensa-Policía Nacional.

En la contestación de la demanda, el **Ministerio de defensa, Policía Nacional** propuso excepciones previas y de mérito, así:

- 2.1. Estricto cumplimiento de un deber legal y mandamiento escrito de autoridad administrativas competente emitido con las formalidades legales.
- 2.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva
- 2.3. Hecho determinante de un tercero
- 2.4. Improcedencia de la falla del servicio

3. De la excepción previa propuesta por el Ministerio de defensa-Policía Nacional.

En virtud de lo anterior, es fundamental señalar que, conforme al parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA y al artículo 100 del Código General del Proceso, aplicable a los asuntos contencioso-administrativos por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, ninguna de las excepciones planteadas por la entidad tiene carácter de previa. Por lo tanto, estas deberán resolverse de fondo en la sentencia. No obstante, dada la relevancia de los argumentos de defensa expuestos por la entidad, procederé a pronunciarme en los siguientes términos:

- 3.1. Estricto cumplimiento de un deber legal y mandamiento escrito de autoridad administrativas competente emitido con las formalidades legales.

Indica la entidad Policía Nacional, que “los uniformados policiales señalado en el escrito de la demanda como responsable de practicar el procedimiento de demolición del bien inmueble de propiedad del demandante Armando Sánchez, realizó el procedimiento legal y actuó en cumplimiento de una orden de autoridad administrativa competente emitida con las formalidades legales (Inspector de policía de la alcaldía de Pereira), al cual mediante acta 2021-231/R-15-2021-361 correspondiente a la Audiencia Pública adelantada en el proceso verbal abreviado con radicado 153-2021233, ordeno llevar a cabo dicha demolición, solicitando el acompañamiento policivo y ejecutando en debida forma y sobre las que no emerge reproche en la demanda”

Es cierto que existía una orden en el proceso administrativo de carácter policivo por “amenaza de ruina” para el inmueble ubicado en la Calle 11 # 5 – 16 de Pereira, la cual debía ser ejecutada. También se solicitó acompañamiento policial, lo que llevó al Capitán Julián Botero a contactar al Inspector para confirmar si había una orden de demolición, a lo que el Inspector respondió afirmativamente. El Capitán expresó que el inmueble era un foco de inseguridad y que enviaría investigadores al lugar. Posteriormente, se envió



al Inspector un material videográfico que mostraba a “presuntos” consumidores, sugiriendo que el inmueble era utilizado para la venta y consumo de estupefacientes.

Sin embargo, la medida correctiva no se ejecutó en la fecha y hora fijadas, y no se tuvo conocimiento de los acontecimientos entre el 15 y el 17 de marzo de ese año. A pesar de esto, el 18 de marzo de 2022, el Ministerio de Defensa, la Policía Metropolitana de Pereira y la Alcaldía de Pereira convocaron a una rueda de prensa en el inmueble, que fue descrito como el “derribamiento de un mito de inseguridad” que afectaba a la comunidad del barrio La Libertad. La vivienda fue demolida en presencia del Ministro de Defensa, el Alcalde de Pereira y varios miembros de la Policía Nacional, así como de medios de comunicación, siendo sellada para prevenir el ingreso de habitantes de calle y presentada como un triunfo contra la delincuencia.

A raíz de las declaraciones del Ministro de Defensa y el Alcalde, los miembros de la familia que habitaban el inmueble recibieron amenazas de grupos criminales, quienes afirmaron que se realizaba un expendio de drogas “sin su autorización”, dado que estos grupos son conocidos por su control sobre el microtráfico en la zona. Días después de la demolición, se divulgó a través de los medios que el incidente era un “montaje” orquestado por las entidades involucradas y que no se realizaban las actividades denunciadas en la rueda de prensa.

Ante estas revelaciones, la Oficina de Control Disciplinario de la Policía Metropolitana de Pereira abrió una indagación preliminar bajo el radicado SIED2D EE-MEPER-2022-65, la cual fue remitida a la Inspección General de la Policía Nacional en Bogotá. Por lo tanto, aunque existía una orden de demolición esta era por “amenaza de ruina”, y no por el supuesto uso del inmueble para el consumo de estupefacientes. Esto demuestra que el actuar de los uniformados se basó en una orden administrativa con otra causa, y que, gravemente, orquestaron un montaje en complicidad con las otras entidades demandadas, causando un daño que se considera antijurídico e injustificado.

En consecuencia, el actuar engañoso de los uniformados y la evidente complicidad delictiva en este proceso, esta excepción no está destinada a prosperar. La manipulación de la información y la orquestación de un montaje para justificar la demolición del inmueble revelan una falta de integridad en el ejercicio de sus funciones. Estas acciones no solo transgreden los principios de legalidad y transparencia que deben regir en la actuación policial, sino que también generan un grave perjuicio a los derechos de los ciudadanos involucrados. En este contexto, es fundamental que se reevalúen las bases sobre las cuales se sostiene dicha excepción, ya que su validez se ve comprometida por la falta de legitimidad y la posible violación de derechos fundamentales. Por lo tanto, resulta necesario desestimar esta excepción, dado que se sustenta en un proceder ilícito que no merece protección legal.

3.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva

*“La falta de legitimación en la causa por pasiva es la capacidad para ser parte en la litis (**legitimación formal**). No se puede confundir con la **falta de legitimación en la causa por pasivo material**, la cual se analiza solo de fondo en sentencia, esta última guarda*



relación con la participación o no que puedan llegar a tener las demandadas con el hecho generador del daño alegado por los demandantes”¹

Ahora bien, en el escrito de la demanda se ha demostrado responsabilidad directa a la demandada, por lo cual, *es suficiente para tenerlas por vinculadas y legitimadas (formal – capacidad para ser parte)* hasta que se resuelva de fondo el asunto de la referencia y se determinen si existe participación o no en el hecho dañoso alegado de cada una de las demandadas en este proceso, sin embargo, por considerarlo importante procede este mandatario judicial a manifestar lo siguiente:

Indica la entidad que “Se advierte en primer lugar, que el procedimiento realizado por el orgánico de la Institución, se llevó a cabo por el requerimiento administrativo con la demolición del bien inmueble ubicado en la calle 11 No. 5 – 16 del Barrio la libertad de la ciudad de Pereira el día 18 de marzo del 2022, el cual se trataba de una orden administrativa en un proceso verbal abreviado por parte de la alcaldía de Pereira, es decir, referido proceder desde ningún punto de vista genera daños como los pretendidos por la parte actora”.

Contrario a lo manifestado por la entidad, se advierte que la Policía Metropolitana de Pereira, desfiguró de manera irregular la realidad de los hechos, pues sin fundamento alguno, para el día 18 de marzo de 2022, el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, citó en conjunto con el Ministerio de Defensa y el entonces Alcalde de Pereira, a una rueda de prensa con la presencia de medios de comunicación locales y nacionales donde manifestaron que según **información recolectada por la Seccional de Investigación Judicial – SIJIN** – el lugar era un sitio de expendio y consumo de sustancias estupefacientes frecuentado por habitantes de calle.

Es importante señalar como antecedente que **fueron miembros de la Policía Nacional**, los que aprovechando que sobre el bien inmueble pesaba una medida correctiva de demolición por amenaza de ruina, en una palmaria necesidad de mostrar un resultado positivo ante los altos mandos y el Ministro de la Defensa Nacional, destinaron sus esfuerzos a **construir una versión falsa y amañada de los hechos**, para ello, engañaron al señor Armando Sánchez, aquí demandante, para ingresar a la vivienda bajo el argumento que iban a realizar una inspección, a lo que el adulto mayor accedió confiando plenamente en la investidura de los policiales y de los cuales presumió su buena fe. Sin embargo, armando un falso teatro, dichos policías ofrecieron dinero a algunos habitantes de calle para que ingresaran al inmueble y permitieran tomar unas imágenes de video en una aparente escena de consumo de estupefacientes, imágenes que fueron publicadas en medios de comunicación por parte de la Policía Nacional, con el fin de acreditar la escena orquestada por los miembros de la fuerza pública. **Lo anterior de conformidad con la información recaudada en la investigación adelantada por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar.**

No pasó mucho tiempo para que múltiples medios de comunicación transmitieran noticas sobre el **“amañado operativo policial”**, el cual fue tildado por los medios de comunicación como una **“mentira fabricada por la Policía Nacional”**, la cual afectó de manera grave la integridad de la víctima directa y su grupo familiar, pues se vio entre

¹ Jueza, Corina Duque, JUZGADO TREINTA Y UNO (31) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN TERCERA, primero (01) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).



dicho el buen nombre y la honra de unos ciudadanos, que siempre han mostrado honorabilidad y probidad en todos los aspectos de su vida, siendo menoscabado por miembros de una institución que se encuentra llamada a proteger los derechos de los ciudadanos y los bienes jurídicamente tutelados.

Como era de esperarse, tan pronto los medios de comunicación informaron de la noticia, **la Policía Nacional procedió con la apertura de la investigación disciplinaria** contra varios miembros de la institución involucrados, la cual hasta la fecha goza del carácter de reservada y que cursa en la inspección general de la Policía Nacional, por otro lado, se conoció que la oficina de control disciplinario interno, el pasado 30 de marzo de 2022, remitió copias al **Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar con el fin de iniciar el respectivo proceso penal que se encuentra en curso.**

En este sentido, el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar abrió una indagatoria por los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Esta investigación llevó a la captura de seis miembros de la institución, incluyendo al Coronel Carlos Andrés García Suárez, quien, en el momento de su detención, se desempeñaba como subcomandante de la Policía en Cúcuta. También fueron capturados los mayores César Alfonso Bohorquez Salcedo (quien se encontraba en proceso de ascenso al grado de teniente coronel) y Wilmer Delgado Herrera, así como el Capitán Héctor Julián Botero Sánchez, el Teniente Jarrixon Perante Sánchez y el Subintendente Rutber Vega Ramírez, quienes ocupaban los mismos cargos en la fecha de los hechos. Por lo tanto, esta excepción no está destinada a prosperar.

Con respecto a los demás medios de excepción, este segmento procesal no se referirá a ellos, ya que ni estos ni ninguna de las excepciones propuestas atacan directamente las pretensiones de la demanda mediante la presentación de hechos nuevos que, por sí solos, puedan anular, suspender o modificar sus efectos. El análisis profundo del asunto planteado deberá resolverse en la sentencia que su honorable despacho emita.

Sobre este punto, la doctrina ha expuesto que:

*“[...] Excepciones de fondo y su declaración oficiosa. El código administrativo se refiere solamente a las excepciones que se oponen a la prosperidad de la pretensión (artículo 164, inciso segundo), o sea aquellas que implican una defensa de fondo, por medio de la cual el demandado ya no se limita a contradecir o negar los hechos constitutivos del derecho o al simple rechazo de la pretensión, sino a afirmar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo que tenga como consecuencia que la relación jurídica no produzca efecto legal. En sentido más estricto se puede afirmar que el fenómeno exceptivo viene a implicar un hecho que por sí mismo tienen el poder jurídico de enervar la pretensión del demandante [...]”.*² (subrayado fuera del texto original)

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Consejo de Estado³, al diferenciar las razones de defensa de las excepciones de fondo, así:

² Betancur Jaramillo, Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Sexta edición 2.002. pág. 325

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 8 de julio de 2010, radicación 11001-03-28-000-2010-00001-00, consejera ponente: Susana Buitrago Valencia.



“[...] Para resolver este punto, la Sala recuerda que **los argumentos con los cuales en un proceso judicial se pretenda impedir el surgimiento de las pretensiones de la demanda se consideran genéricamente excepciones. Pero la proposición de éstas no puede basarse simplemente en defender la legalidad del acto acusado**, como erróneamente lo presenta el apoderado del señor García García.

Además, **la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que son diferentes las razones de defensa que las excepciones de fondo, pues las primeras versan sobre los hechos y el derecho que se alega por la parte demandante, mientras que las segundas atienden a situaciones extintivas del derecho o que impiden el ascenso de las pretensiones.**

Las excepciones deben versar sobre hechos extintivos o impeditivos de la pretensión; no pueden confundirse con los argumentos encaminados a desvirtuar los hechos y/o los fundamentos de derecho en que sustenta el demandante sus peticiones, que constituyen el ejercicio global de la defensa; así se deduce del artículo 144 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 46 de la Ley 446 de 1998, que distingue entre las razones de la defensa (num.2) y la proposición de las excepciones (num.3)⁴

Así, en el caso sub- examine no encuentra la Sala que las excepciones propuestas ostenten en realidad esta entidad, toda vez que los argumentos que las estructuran no ponen de presente hechos o razones, que impidan el surgimiento de las pretensiones de la demanda.

En efecto, lo que la parte demandada propone son argumentos de defensa encaminados a desvirtuar la ilegalidad del Decreto 4736 de 2009, los cuales, de ser el caso, serán resueltos al analizar de fondo el presente asunto [...]”. (Negrilla y subraya fuera de texto).

Así las cosas, este mandatario judicial no hará alusión a las demás excepciones incoadas en las contestaciones, para que las mismas sean resueltas de fondo en sentencia.

Atentamente,

JONATHAN VELÁSQUEZ SEPÚLVEDA

Representante legal de Legalgroup Especialistas en Derecho S.A.S.

Cédula de ciudadanía 1.116.238.813

Tarjeta profesional 199.083 del Consejo Superior de la Judicatura

Proyectó: LOG
Revisó: AMGG

⁴ Sentencia del 9 de marzo de 2006. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo., Sección Quinta. Consejero ponente Dr. Filemón Jiménez Ochoa. Rad. No. 11001-03-28-000-2004-00008-01(3216) Actor: Orlando Arciniegas Lagos.